



# BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

## SECCION CORTES GENERALES

X LEGISLATURA

Serie A:  
ACTIVIDADES PARLAMENTARIAS

6 de febrero de 2012

Núm. 2

### ÍNDICE

Páginas

#### Composición y organización de órganos mixtos y conjuntos

TRIBUNAL DE RECURSOS CONTRACTUALES DE LAS CORTES GENERALES

413/000003 (CD) Nombramiento de miembros del Tribunal de Recursos Contractuales de las Cortes  
899/000001 (S) Generales ..... 2

#### Resoluciones normativas de las Cortes Generales

413/000001 (CD) Resolución de las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado, reunidas en  
628/000001 (S) sesión conjunta, de 25 de enero de 2012, por la que se modifica el Reglamento de  
Organización y Funcionamiento del Defensor del Pueblo ..... 2

413/000002 (CD) Acuerdo de las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado, reunidas en  
628/000002 (S) sesión conjunta, de 25 de enero de 2012, en relación con la cuantía de la compen-  
sación estatal por gastos realizados en la difusión de las proposiciones y la recogida  
de firmas de iniciativas legislativas populares cuando alcancen su tramitación  
parlamentaria ..... 6

413/000004 (CD) Resolución de las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado, de 31 de  
628/000003 (S) enero de 2012, sobre composición de las Comisiones Mixtas Congreso-Senado ... 6

#### Control de la acción del Gobierno

PROPOSICIONES NO DE LEY/MOCIONES

##### Comisión Mixta para la Unión Europea

161/000157 (CD) Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y  
663/000001 (S) Democracia, sobre el cumplimiento del Derecho Europeo en España ..... 7

## COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN DE ÓRGANOS MIXTOS Y CONJUNTOS

### TRIBUNAL DE RECURSOS CONTRACTUALES DE LAS CORTES GENERALES

413/000003 (CD)  
899/000001 (S)

Las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado, en su reunión conjunta del día 25 de enero de 2012, han acordado designar como miembros del Tribunal de Recursos Contractuales de las Cortes Gene-

rales en los términos y con las condiciones previstas en la Resolución de 21 de diciembre de 2010, adoptada por las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado en reunión conjunta, por la que se crea dicho Tribunal, al Diputado Excmo. Sr. don Julio Villarrubia Mediavilla y al Senador Excmo. Sr. don Manuel Guillermo Altava Lavall.

Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2012.—El Letrado Mayor de las Cortes Generales, **Manuel Alba Navarro**.

## RESOLUCIONES NORMATIVAS DE LAS CORTES GENERALES

413/000001 (CD)  
628/000001 (S)

### RESOLUCIÓN DE LAS MESAS DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS Y DEL SENADO, DE 25 DE ENERO DE 2012, POR LA QUE SE MODIFICA EL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL DEFENSOR DEL PUEBLO

Las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado, en su reunión conjunta del día 25 de enero de 2012, previo ejercicio por la Defensora del Pueblo en funciones de la iniciativa de reforma del Reglamento de Organización y Funcionamiento de dicha Institución, prevista en su disposición adicional, han aprobado la siguiente modificación:

#### REFORMA DEL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL DEFENSOR DEL PUEBLO

##### Exposición de motivos

La modificación operada en la Ley Orgánica del Defensor del Pueblo, mediante la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre, al objeto de que esta Institución asuma las funciones del Mecanismo Nacional de Prevención a que se refiere el Protocolo Facultativo de la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, hecho en Nueva York, el 18 de diciembre de 2002, obliga a introducir las necesarias adaptaciones en el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Defensor del Pueblo. En particular,

y por mandato legal, es preciso establecer la estructura, composición y funcionamiento del Consejo Asesor que prevé la citada reforma como órgano de cooperación técnica y jurídica en el ejercicio de las funciones propias del Mecanismo Nacional de Prevención.

Por lo anterior, las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado, en su reunión conjunta del día 25 de enero de 2011, analizada la propuesta elevada por la Defensora del Pueblo (e.f.) han aprobado la siguiente reforma del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Defensor del Pueblo:

##### Artículo único.

1. El artículo 1 queda modificado con la siguiente redacción:

«Artículo 1.º 1. El Defensor del Pueblo, en cuanto alto comisionado de las Cortes Generales para la defensa de los derechos comprendidos en el Título I de la Constitución, podrá supervisar la actividad de la Administración, dando cuenta a las Cortes Generales.

2. El Defensor del Pueblo ejercerá las funciones de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, previstas en el Protocolo facultativo de la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, hecho en Nueva York el 18 de diciembre de 2002, y dará cuenta de su actividad a las Cortes Generales y al Subcomité para la Prevención de la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas.

3. El Defensor del Pueblo no estará sujeto a mandato imperativo alguno. No recibirá instrucciones de ninguna autoridad y desempeñará sus funciones con autonomía y según su criterio.

4. Ejercerá las funciones que le encomienda la Constitución y su Ley Orgánica.»

2. El artículo 8 queda modificado con la siguiente redacción:

«Artículo 8.º Además de las competencias básicas establecidas en la Ley Orgánica, corresponde al Defensor del Pueblo:

- a) Representar a la Institución.
- b) Proponer a los Adjuntos, a efecto de que la Comisión Mixta Congreso-Senado de relaciones con el Defensor del Pueblo otorgue su conformidad previa al nombramiento y cese de los mismos.
- c) Mantener relación directa con las Cortes Generales a través del Presidente del Congreso de los Diputados, y con ambas Cámaras a través de sus respectivos Presidentes.
- d) Mantener relación directa con el Presidente y Vicepresidentes del Gobierno, los Ministros y Secretarios de Estado y con los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas.
- e) Mantener relación directa con el Tribunal Constitucional y con el Consejo General del Poder Judicial, igualmente a través de sus Presidentes.
- f) Mantener relación directa con el Fiscal General del Estado.
- g) Mantener relación directa con los Presidentes de los Consejos Ejecutivos de las Comunidades Autónomas y con los órganos similares al Defensor del Pueblo que se constituyan en dichas Comunidades.
- h) En cuanto Mecanismo Nacional de Prevención, designar al Presidente del Consejo Asesor, de entre sus Adjuntos, así como a los Vocales que lo integran, de conformidad con el procedimiento establecido en el presente Reglamento.
- i) Convocar y fijar el orden del día de las reuniones de la Junta de Coordinación y Régimen Interior y dirigir sus deliberaciones.
- j) Establecer la plantilla y proceder al nombramiento y cese del Secretario General y del personal al servicio de la Institución.
- k) Aprobar, de acuerdo con las directrices generales fijadas por las Mesas del Congreso y del Senado, el proyecto de presupuesto de la Institución y acordar su remisión al Presidente del Congreso, para su aprobación definitiva por las citadas Mesas e incorporación a los presupuestos de las Cortes Generales.
- l) Fijar las directrices para la ejecución del presupuesto.
- m) Ejercer la potestad disciplinaria.
- n) Aprobar las bases para la selección de personal y la contratación de obras y suministros, con arreglo a lo establecido en los artículos 31 y 42 del presente Reglamento.
- ñ) Aprobar las instrucciones de orden interno que se dicten para mejor ordenación de los servicios.

o) Supervisar el funcionamiento de la Institución.»

3. El artículo 11 queda modificado con la siguiente redacción:

«Artículo 11. 1. El informe anual que, según los artículos 32 y 33 de la Ley Orgánica del Defensor del Pueblo, debe dar éste a las Cortes Generales será sometido, previamente, a la Comisión Mixta de relaciones con el Defensor del Pueblo.

2. Sin perjuicio de dicho informe y de los informes extraordinarios que pueda presentar a las Diputaciones Permanentes de las Cámaras cuando la gravedad o urgencia de los hechos lo aconsejen, el Defensor del Pueblo podrá dar cuenta periódicamente a la Comisión mencionada de sus actividades con relación a un período determinado o a un tema concreto, y la Comisión podrá recabar del mismo cualquier información.

3. El Defensor del Pueblo elaborará informes específicos sobre su actividad como Mecanismo Nacional de Prevención. Dichos informes se elevarán a las Cortes Generales, a través de la Comisión Mixta Congreso-Senado de relaciones con el Defensor del Pueblo, y al Subcomité para la Prevención de la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas».

4. El artículo 12 queda modificado con la siguiente redacción:

«Artículo 12. 1. Corresponderán a los Adjuntos del Defensor del Pueblo las siguientes competencias:

- a) Ejercitar las funciones del Defensor del Pueblo en los casos de delegación y sustitución previstos en la Ley Orgánica.
- b) Dirigir la tramitación, comprobación e investigación de las quejas formuladas y de las actuaciones que se inicien de oficio, proponiendo, en su caso, al Defensor del Pueblo, la admisión a trámite o rechazo de las mismas y las resoluciones que se estimen procedentes, y llevando a cabo las actuaciones, comunicaciones y notificaciones pertinentes.
- c) Colaborar con el Defensor del Pueblo en las relaciones con las Cortes Generales y la Comisión Mixta en ellas constituida al efecto y en la supervisión de las actividades de las Comunidades Autónomas y, dentro de ellas, de la coordinación con los órganos similares que ejerzan sus funciones en este ámbito.
- d) Colaborar con el Defensor del Pueblo en el ejercicio de sus funciones como Mecanismo Nacional de Prevención.
- e) Preparar y proponer al Defensor del Pueblo el borrador de informe anual y los de los demás informes que deban elevarse a las Cortes Generales o al Subcomité para la Prevención de la Tortura.

f) Asumir las restantes funciones que se le encomiendan en las leyes y disposiciones reglamentarias vigentes.

2. La delimitación de los respectivos ámbitos de funciones de los dos Adjuntos se llevará a cabo por el Defensor del Pueblo, poniéndose en conocimiento de la Comisión Mixta constituida en las Cortes Generales en relación con el citado Defensor. Para ello cada Adjunto se responsabilizará de las áreas que se le atribuyan.

Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 8 del presente Reglamento, el Adjunto Primero asumirá la coordinación de los servicios dependientes del Defensor del Pueblo, así como el despacho ordinario con el Secretario General. En su defecto, asumirá las expresadas funciones el Adjunto Segundo.

3. El Adjunto en el que el Defensor del Pueblo delegue las funciones del Mecanismo Nacional de Prevención asumirá la presidencia de su Consejo asesor.

4. La admisión definitiva o el rechazo y, en su caso, la resolución última de las quejas formuladas corresponde acordarla al Defensor del Pueblo o al Adjunto en quien delegue o que le sustituya.

5. El Defensor del Pueblo podrá recabar, oír la Junta de Coordinación y Régimen Interior, el conocimiento, dirección o tratamiento de cualquier queja o investigación cuyo trámite corresponda a los Adjuntos.»

5. El artículo 18 queda modificado con la siguiente redacción:

«Artículo 18. 1. Para el cumplimiento de su función la Junta de Coordinación y Régimen Interior tendrá las siguientes competencias:

a) Informar las cuestiones que afecten a la determinación de la plantilla, así como al nombramiento y cese del personal al servicio de la Institución.

b) Conocer e informar sobre la posible interposición de los recursos de amparo e inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.

c) Conocer e informar cuantos asuntos correspondan a la elaboración del proyecto de presupuesto y de su ejecución, así como de la liquidación del mismo formulada por el Secretario General, antes de su remisión por el Defensor del Pueblo a las Cortes Generales.

d) Deliberar acerca de las propuestas de obras, servicios y suministros.

e) Asistir al Defensor del Pueblo en el ejercicio de sus competencias en materia de personal y económico-financiera.

f) Cooperar con el Defensor del Pueblo en la labor de coordinación de la actividad de las distintas áreas y en la mejor ordenación de los servicios.

g) Conocer los proyectos de informes que deben elevarse a las Cortes Generales o al Subcomité para la Prevención de la tortura de la Organización de las

Naciones Unidas y asistir al Defensor del Pueblo en la dirección y aprobación de los mismos.

h) Conocer e informar el nombramiento y cese del Secretario General.

i) Informar sobre las candidaturas a Vocales del Consejo Asesor del Mecanismo Nacional de Prevención.

j) Informar y asesorar sobre el proyecto de reforma del presente Reglamento.

k) Asesorar al Defensor del Pueblo sobre cuantas cuestiones aquél considere oportuno someter a su consideración.

2. A las sesiones de la Junta de Coordinación y Régimen Interior podrán asistir, a efectos de información y debidamente convocados por el Defensor del Pueblo, los responsables de área.

Con igual carácter podrán ser convocadas a efectos de información y mejor resolución de los asuntos sometidos a la consideración del Defensor del Pueblo aquellas otras personas que éste considere oportunas.

3. Los temas objeto de deliberación constarán en el orden del día de la convocatoria y los acuerdos que adopte la Junta de Coordinación y Régimen Interior se comunicarán a todos sus componentes.»

6. Se añade un Capítulo V con la rúbrica «Consejo Asesor del Mecanismo Nacional de Prevención de Tortura», integrado por los artículos 19 a 22 con el siguiente texto:

«Artículo 19. 1. El Consejo Asesor es un órgano de cooperación técnica y jurídica del Mecanismo Nacional de Prevención.

2. El Consejo Asesor estará integrado por los Adjuntos del Defensor del Pueblo, como miembros natos, además de por un máximo de 10 Vocales.

3. El Adjunto en el que el Defensor del Pueblo delegue las funciones del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura asumirá la Presidencia del Consejo y será sustituido por el otro Adjunto en caso de ausencia o vacante.

4. Los Vocales serán designados entre personas mayores de edad, que se encuentren en el pleno disfrute de sus derechos civiles y políticos, con reconocida trayectoria en la defensa de los Derechos Humanos o en los ámbitos relacionados con el tratamiento a personas privadas de libertad por cualquier causa.

5. La designación de Vocales se efectuará conforme a la siguiente distribución:

a) Un Vocal designado a propuesta del Consejo General de la Abogacía de España.

b) Un Vocal designado a propuesta de la Organización Médica Colegial.

c) Un Vocal designado a propuesta del Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos de España.



d) Hasta dos Vocales designados a propuesta conjunta de los organismos e instituciones con las que el Defensor del Pueblo tenga suscritos convenios de colaboración para el desarrollo de las funciones propias del Mecanismo Nacional de Prevención, si así está previsto en dichos convenios. Las propuestas que se formulen no podrán incluir más que un representante por entidad.

e) Cinco Vocales elegidos de entre las candidaturas que, a título personal o en representación de organizaciones o asociaciones representativas de la sociedad civil, se presenten al Defensor del Pueblo en el marco del procedimiento de designación establecido en el presente Reglamento.

6. Actuará como secretario el Secretario General de la Institución.»

«Artículo 20. 1. Los Vocales del Consejo Asesor serán designados para un período de cuatro años y se renovarán por mitades cada dos.

2. El proceso de designación se iniciará mediante convocatoria pública. Las candidaturas para cubrir los puestos de Vocales a que se refiere el inciso e) del párrafo quinto del artículo 19 se recibirán dentro de los 15 días naturales siguientes a la publicación de la convocatoria y deberán reunir los requisitos formales establecidos en la misma.

3. Corresponde al Defensor del Pueblo hacer la designación de los Vocales, así como poner fin a sus funciones.

4. Cumplido el período al que hace referencia el apartado primero del presente artículo, los Vocales cesantes continuarán ejerciendo sus funciones hasta la designación de los nuevos Vocales.

5. Los Vocales del Consejo Asesor no percibirán retribuciones por el ejercicio de sus funciones salvo, en su caso, las que puedan corresponder en aplicación de la normativa sobre indemnizaciones por razón del servicio.»

«Artículo 21. 1. El Consejo Asesor del Mecanismo Nacional de Prevención se reunirá, al menos, dos veces al año.

2. A las sesiones del Consejo Asesor podrán asistir los miembros del personal del Defensor del Pueblo, representantes de organismos internacionales de Derechos Humanos u otras personas que sean convocadas por indicación de su Presidente.»

«Artículo 22. Serán funciones del Consejo Asesor del Mecanismo Nacional de Prevención las siguientes:

a) Realizar propuestas sobre visitas a lugares donde se hallen personas privadas de libertad.

b) Realizar propuestas para la mejora de los protocolos de visita y para el seguimiento de las mismas.

c) Evacuar los informes que el Defensor del Pueblo le solicite sobre la normativa de relevancia para la situación de las personas privadas de libertad.

d) Proponer programas de formación y cursos de especialización en materia de prevención de la tortura y de los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

e) Realizar el seguimiento de los informes que se elaboren por el Mecanismo Nacional de Prevención y por el Subcomité para la Prevención de la Tortura.

f) Aquellos otros asuntos que se sometan a su consideración.»

7. El actual Capítulo V «Del Secretario General» pasa a ser el Capítulo VI, manteniendo su rúbrica. El artículo 19 pasa a ser el artículo 23 y queda redactado del siguiente modo:

«Artículo 23. 1. Corresponderán al Secretario General las competencias siguientes:

a) El gobierno y régimen disciplinario de todo el personal, ejerciendo las competencias no atribuidas específicamente al Defensor del Pueblo, los Adjuntos o la Junta de Coordinación y Régimen Interior.

b) Dirigir los servicios dependientes de la Secretaría General.

c) Preparar y presentar a la Junta de Coordinación y Régimen Interior las propuestas de selección de los Asesores y demás personal, para su informe y posterior resolución por el Defensor del Pueblo.

d) Preparar y elevar a la Junta de Coordinación y Régimen Interior el anteproyecto de Presupuesto.

e) Administrar los créditos para gastos del Presupuesto del Defensor del Pueblo.

f) Redactar las actas y notificar los acuerdos de la Junta de Coordinación y Régimen Interior.

g) Convocar, por indicación del Presidente, el Consejo Asesor del Mecanismo Nacional de Prevención y levantar acta de sus reuniones.

2. En caso de vacante, ausencia o enfermedad, el Secretario General será sustituido interinamente por el Director que designe el Defensor del Pueblo, oída la Junta de Coordinación y Régimen Interior.»

8. Los actuales artículos 20 a 22 del Capítulo dedicado al Secretario General pasan a ser los artículos 24, 25 y 26 respectivamente.

En el precepto ahora numerado como artículo 26, párrafo segundo, se rectifica la referencia contenida en el segundo párrafo, relativa al artículo del presente Reglamento que regula la custodia y tratamiento de documentos declarados como reservados o secretos, que ha de entenderse hecha al artículo 30.

9. El actual Capítulo VI, titulado «Presentación, instrucción e investigación de las quejas», que comprende los actuales artículos 23 a 26, pasa a ser el Capí-

tulo VII, manteniendo la rúbrica y quedando sus artículos numerados como 27, 28, 29 y 30 respectivamente.

10. El actual Capítulo VII, titulado «Personal al servicio del Defensor del Pueblo, que comprende los actuales artículos 27 a 31, pasa a ser el Capítulo VIII, manteniendo la rúbrica y quedando sus artículos numerados como 31, 32, 33, 34 y 35 respectivamente.

11. El actual Capítulo VIII, titulado «Régimen disciplinario», que comprende los actuales artículos 32 a 34, pasa a ser el Capítulo IX, manteniendo la rúbrica y quedando sus artículos numerados como 36, 37 y 38 respectivamente.

12. El actual Capítulo IX, titulado «Régimen económico», que comprende los actuales artículos 35 a 38, pasa a ser el Capítulo X, manteniendo la rúbrica y quedando sus artículos numerados como 39, 40, 41 y 42 respectivamente.

13. Se añade una disposición transitoria del siguiente tenor:

«Disposición transitoria.

Transcurridos dos años desde la toma de posesión del primer Consejo Asesor del Mecanismo Nacional de Prevención se determinarán mediante sorteo los Vocales que deban ser renovados. Si el número de Vocales del Consejo fuere de nueve ser renovarán cuatro puestos.»

14. La presente reforma se publicará en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales» y en el «Boletín Oficial del Estado» y entrará en vigor al día siguiente de su publicación en éste último.

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero de 2012.—El Presidente del Congreso de los Diputados, **Jesús Posada Moreno**.—El Presidente del Senado, **Pío García-Escudero Márquez**.

**413/000002 (CD)**  
**628/000002 (S)**

ACUERDO DE LAS MESAS DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS Y DEL SENADO, DE 25 DE ENERO DE 2012, POR EL QUE SE REVISLA LA CUANTÍA DE LA COMPENSACIÓN ESTATAL POR GASTOS REALIZADOS EN LA DIFUSIÓN DE LAS PROPOSICIONES Y LA RECOGIDA DE FIRMAS DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS POPULARES CUANDO ALCANCEN SU TRAMITACIÓN PARLAMENTARIA

El artículo 15 de la Ley Orgánica 3/1984, de 26 de marzo, reguladora de la Iniciativa Legislativa Popular, modificada por la Ley Orgánica 4/2006, de 26 de mayo, prevé el resarcimiento por el Estado de los gastos realizados en la difusión de las proposiciones y la recogida

de firmas de las iniciativas legislativas populares cuando hubieren alcanzado su tramitación parlamentaria.

El apartado segundo del citado artículo establece que «los gastos deberán ser justificados en forma por la Comisión Promotora. La compensación estatal no excederá, en ningún caso, de 300.000 euros. Esta cantidad será revisada anualmente por los órganos de gobierno de las Cámaras de las Cortes Generales con arreglo a las variaciones del Índice de Precios al Consumo».

Para cumplir con dicho precepto legal, las Mesas del Congreso y del Senado, en reunión conjunta, han adoptado el siguiente acuerdo:

Primero. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15.2 de la Ley Orgánica 3/1984, la cuantía de la compensación estatal por los gastos realizados en la difusión de las proposiciones y la recogida de firmas de las iniciativas legislativas populares cuando alcancen su tramitación parlamentaria se fija en 327.894 euros hasta su próxima revisión.

Segundo. Esta cuantía así revisada será aplicable a los reconocimientos del derecho a percibir indemnización regulada en el artículo 15 de la Ley Orgánica 3/1984 que sean acordados por la Mesa del Congreso de los Diputados con posterioridad al día siguiente a la publicación de este acuerdo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

El Presidente del Congreso de los Diputados, **Jesús Posada Moreno**.—El Presidente del Senado, **Pío García-Escudero Márquez**.

**413/000004 (CD)**  
**628/000003 (S)**

RESOLUCIÓN DE LAS MESAS DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS Y DEL SENADO, DE 31 DE ENERO DE 2012, SOBRE COMPOSICIÓN DE LAS COMISIONES MIXTAS CONGRESO-SENADO

Primero.

Las Comisiones Mixtas se compondrán de 44 miembros designados por los Grupos Parlamentarios de acuerdo con la siguiente distribución:

- Grupo Parlamentario Popular: 14 Diputados y 10 Senadores.
- Grupo Parlamentario Socialista: 7 Diputados y 5 Senadores.
- Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió): 1 Diputado y 1 Senador.
- Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural: 1 Diputado.
- Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia: 1 Diputado.

— Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV): 1 Diputado o 1 Senador.

— Grupo Parlamentario Mixto: 1 Diputado y 1 Senador.

— Grupo Parlamentario de Entesa pel Progrés de Catalunya: 1 Senador.

Segundo.

En las votaciones en las Comisiones Mixtas se entenderá que no existe empate cuando la igualdad de votos, siendo idéntico el sentido en el que hubieren votado todos los miembros de la Comisión pertenecientes a un mismo Grupo Parlamentario, pudiera dirimirse ponderando el número de votos con que cada Grupo cuente en el conjunto de ambas Cámaras.

Tercero.

Las Comisiones Mixtas tendrán su sede en la Cámara a la que pertenezca su Presidente.

En caso de elección de un nuevo Presidente durante la Legislatura se mantendrá la sede hasta la conclusión del período de sesiones.

Cuarto.

Las Comisiones Mixtas se registrarán, a todos los efectos, por el Reglamento de la Cámara donde se encuentre su sede, al cual deberán ajustarse todas las iniciativas formuladas por sus miembros y por los Grupos Parlamentarios de ambas Cámaras.

Quinto.

Queda derogada la Resolución de las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado, reunidas en sesión conjunta, de 26 de mayo de 2008, sobre composición de las Comisiones Mixtas Congreso-Senado.

Disposición final.

La presente Resolución entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2012.—El Presidente del Congreso de los Diputados, **Jesús Posada Moreno**.—El Presidente del Senado, **Pío García-Escudero Márquez**.

## CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO

### PROPOSICIONES NO DE LEY/MOCIONES

#### Comisión Mixta para la Unión Europea

**161/000157** (CD)

**663/000001** (S)

La Mesa del Congreso de los Diputados, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto al asunto de referencia.

(161) Proposición no de Ley en Comisión.

Autor: Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.

Proposición no de Ley sobre el cumplimiento del Derecho Europeo en España.

Acuerdo:

Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión Mixta para la Unión Europea, entendiéndose que es la Comisión Mixta la que insta al Gobierno a la adopción de las medidas correspondientes. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Senado, al Gobierno y al Grupo proponente y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación.

Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2012.—P. D. El Letrado Mayor de las Cortes Generales, **Manuel Alba Navarro**.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia, a instancia de la Diputada doña Rosa María Díez González y al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el cumplimiento del Derecho Europeo en España para su debate en Comisión.

Exposición de motivos

El Gobierno acordó el 23 de noviembre de 2009 encomendar al Consejo de Estado la elaboración de un informe en el que se examinasen los mecanismos actualmente existentes en el ordenamiento español, tanto a nivel constitucional como ordinario, para garantizar el cumplimiento del Derecho de la Unión Europea (UE) y, en su caso, determinar y repercutir la responsabilidad a las Comunidades Autónomas y otros entes en caso de incumplimiento. Con tal motivo, el Consejo de Estado, a través de su Comisión de Estudios, aprobó el

correspondiente Informe en reunión del pasado 15 de diciembre de 2010.

La necesidad de dar una adecuada respuesta a esta cuestión es si cabe más acuciante tras la aprobación del nuevo Tratado de Lisboa que refuerza los supuestos de imposición de sanciones a los Estados miembros, máxime teniendo en cuenta que España es el único país con estructura descentralizada de la UE que no tiene bien resuelta esta cuestión ni en la propia Constitución ni, al menos, en una ley general al respecto que contemple de forma unitaria todos los mecanismos y supuestos tanto en relación con la prevención y reacción frente a incumplimientos del Derecho europeo, como con la repercusión del pago de las sanciones que pudieran imponerse al Reino de España. Por el contrario, se ha optado hasta la fecha por regulaciones sectoriales de escasa virtualidad práctica (aguas, transposición de la directiva de servicios, etc.). En este sentido, la Disposición adicional primera Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible tan sólo tímidamente y de forma harto limitada puede entenderse que comienza a hacerse eco de las propuestas del citado Informe.

Cabe por otra parte mantener dudas razonables sobre la intención del Gobierno de poner en marcha las medidas que propone el Consejo de Estado, siguiendo así su incoherente inercia consolidada de pedir un Informe al Alto Órgano Consultivo para luego no cumplirlo o directamente dejarlo en un cajón (cfr. Informes del Consejo de Estado sobre la reforma constitucional, inserción del Derecho Europeo y reforma del régimen electoral). En este sentido, llama la atención que el Gobierno no considere necesario ni siquiera ofrecer una justificación de las razones que le han llevado a desconocer el resultado de Informes que él mismo ha solicitado, lo que contrasta con la actitud de otros gobiernos e instituciones, como la Comisión Europea, la cual se obliga cuando solicita un informe a un órgano independiente (por ejemplo, en el ámbito del Programa marco en I+D) a motivar su reacción a las distintas propuestas realizadas, especialmente en el caso de que decida no seguirlas.

Esta situación no puede mantenerse indefinidamente. Ya que la Constitución española (cfr. Artículo 93) atribuye al Gobierno y a estas Cortes Generales la obligación de garantizar el cumplimiento de los tratados y resoluciones emanadas de los órganos supranacionales. Y porque tenemos compromisos asumidos en el marco

de la Unión Europea, incluida la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, según los cuales ningún Estado miembro puede adoptar o mantener disposiciones, incluso de rango constitucional, que dificulten, hagan imposible o excesivamente gravosa la correcta aplicación del Derecho europeo.

A la luz de los argumentos anteriores y de las propuestas recientemente presentadas por el Consejo de Estado y las mejores prácticas desarrolladas por otros Gobiernos e instituciones, Unión Progreso y Democracia, presenta la siguiente

#### Proposición no de Ley

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a aprobar, en cumplimiento de las recomendaciones del Consejo de Estado y para garantizar la igualdad y la cohesión de los ciudadanos españoles, en el plazo de tres meses:

1. Un proyecto de ley para garantizar el cumplimiento del Derecho de la Unión Europea en el que se regule de forma conjunta las medidas que el Estado puede adoptar:

- a) Prevenir el incumplimiento, evitando que llegue a consumarse.
- b) En el caso de producirse un incumplimiento, este se corrija antes de que se imponga la correspondiente sanción por parte de la Unión Europea.
- c) En el caso de que se sancione el incumplimiento, repercutir la responsabilidad del Estado a quien haya incumplido.

2. También en ese proyecto deberán establecerse expresamente las modificaciones que sean necesarias de las Leyes 12/2002 relativa al Concierto Económico del País Vasco y 25/2003 relativa al Convenio Económico del Estado con la Comunidad Foral de Navarra para que les sea de aplicación la repercusión de la responsabilidad del Estado, de forma que no existan desigualdades en la correcta aplicación del Derecho de la Unión Europea en ningún sitio de España.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero de 2012.—**Rosa María Díez González**, Portavoz del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.

Edita: **Congreso de los Diputados**

Calle Floridablanca, s/n. 28071 Madrid

Teléf.: 91 390 60 00. Fax: 91 429 87 07. <http://www.congreso.es>

Imprime y distribuye: **Imprenta Nacional BOE**

Avenida de Manoteras, 54. 28050 Madrid

Teléf.: 902 365 303. <http://www.boe.es>

Depósito legal: **M. 12.580 - 1961**

